

El aeropuerto de El Prat como metáfora

ANTÓN COSTAS

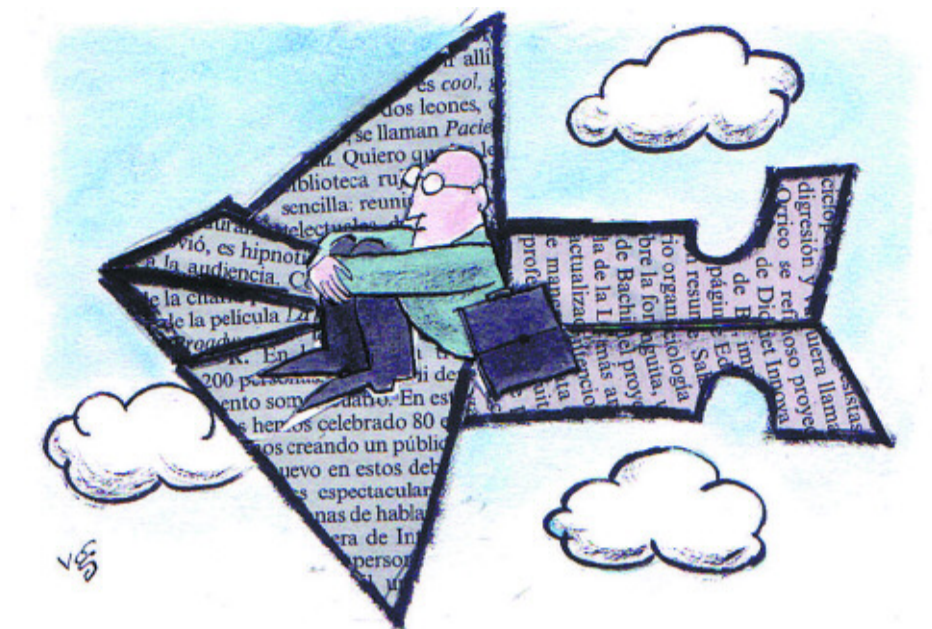
En ocasiones tengo la impresión de que en Cataluña nos comportamos con la conducta propia del *barrufet emprenyat* de la historieta belga que narra las aventuras y desventuras de una especie de pequeñas criaturas azules que viven en un bosque de algún lugar de Europa. Si pudiéramos elegir la conducta más adecuada de entre el censo de personajes de las historietas del belga Peyo, la que mejor nos iría es la de la sabiduría del *gran barrufet*.

Porque vivir en estado de permanente irritación no es bueno, ni para el cuerpo ni para los resultados que queremos alcanzar. Aun en aquellos casos en que tenemos razón en exigir que las cosas cambien, ese estado anímico nos mete en el cuerpo un mal rollo que nos lleva a equivocarnos en las estrategias para lograrlo. Sobre todo, si el cambio busca permitirnos más margen de acción para decidir cómo hacer las cosas, para autogobernarnos.

Y hay algo que aún es peor. Esa equivocación a la que nos lleva el estado de irritación permanente acaba provocando, cuando no se consigue el objetivo buscado, una frustración que incrementa el malestar con nosotros mismos y lo que nos rodea.

Algo de eso nos pasó con el Estatuto. Y, si no actuamos con sabiduría, puede ocurrirnos de nuevo si intentásemos convertir de la noche a la mañana el aeropuerto de El Prat en un aeropuerto internacional, es decir, en un aeropuerto central o *hub*, desde el que se pueda volar directamente a cualquier parte del globo sin pasar por conexiones intermedias en otros aeropuertos.

El aeropuerto de El Prat se ha convertido en una metáfora de otras muchas cosas que nos están pasando y que nos tienen confundidos. Somos una economía y un país que viene de ser líder en España, pero es un liderazgo actualmente puesto en cuestión por tres transformaciones tremendas que están teniendo lugar a nuestro alrededor. Por un lado, por el intenso y profundo cambio tecnológico que ha impactado de forma especial sobre las economías industriales, como la nuestra. En segundo lugar, por la globalización de la economía y la aparición de nuevos competidores asiáticos en manufacturas en las que hasta ahora



VIRGILI

teníamos ventajas de costes y precios. Y, en tercer lugar, por una revolución en las formas de propiedad, del tamaño y de la gestión de las empresas, frente a las cuales el exitoso espíritu empresarial y las empresas familiares se muestran ahora impotentes para aprovechar esa revolución.

Ese cuestionamiento de nuestro liderazgo económico y empresarial nos hace sentirnos inquietos, con un malestar difuso que no somos capaces de concretar. Ambicionamos un lugar propio en el mundo global que se ha abierto ante nosotros, pero no sabemos aún cual es la estrategia más adecuada. Nuestras ambiciones vuelan, pero nuestras políticas siguen atadas por comportamientos políticos y ciudadanos contradictorios. Queremos ir rápido hacia ese mundo global, pero nos oponemos a infraestructuras que hacen posible lograrlo.

En este estado de cosas, que tienen que ver con el espíritu y con la materia, el debate sobre El Prat es como una metáfora de todo eso que nos pasa, pero que aún no sabemos qué es, ni menos aún cómo lograrlo.

Pero, mientras tanto, convendría no co-

meter los mismos errores que con el Estatuto. No ambicionar primero los más altos cielos, para caer después en picado hacia una nueva frustración colectiva. Es necesario actuar de forma prudente, sabiendo cuáles son los factores económicos que nos favorecen y los factores políticos que condicionan la estrategia a seguir.

Disponemos de un buen análisis de la inadecuada situación aeroportuaria española actual, así como de las posibilidades futuras de El Prat como aeropuerto internacional. Los trabajos del profesor Germà Bel constituyen una de las contribuciones más brillantes que recuerdo en nuestro país a la formación de políticas públicas. Déjenme recordar sólo tres de sus conclusiones. Entre los países grandes (por población) y desarrollados, España es el único país en que los aeropuertos se siguen gestionando de forma centralizada por un organismo estatal (AENA). Segundo, que El Prat es el único aeropuerto de un país europeo en el que existen vuelos intercontinentales que no son operados por la compañía de bandera del propio país (Iberia). Y, tercero, que

aun cuando se pueda objetar con razón que en este momento no existe demanda suficiente de vuelos internacionales para hacer de El Prat un aeropuerto internacional como, por ejemplo, el de Milán, el profesor Bel señala que a medio plazo la aparición de esa demanda no es independiente de la oferta, es decir, de que existan unas instalaciones aeroportuarias y una gestión propia de esas instalaciones que vayan creando el caldo de cultivo para que pueda crecer la demanda.

Sabemos el rumbo a seguir. Ahora hay que aprovechar vientos favorables. En este sentido, hay que recordar que las políticas públicas no son sólo, ni fundamentalmente, el reflejo de un buen análisis técnico. También cuentan, y mucho, la política —es decir, el juego del poder— y las viejas instituciones, como AENA.

Seamos ambiciosos, pero dejemos de lado las grandes palabras. Lo del *hub* ya llegará. Fijemos primero la misión que debe cumplir el aeropuerto de Barcelona en el conjunto del sistema aeroportuario catalán y español. Busquemos participar, junto con AENA, en la gestión de las nuevas instalaciones de la T-Sur. Demostremos que sabemos ser buenos gestores. Introduzcamos participación privada en esa gestión para, entre otras cosas, suavizar las tensiones entre instituciones. El modelo de la Fira de Barcelona es un buen ejemplo. Busquemos acuerdos para nuevas líneas internacionales con origen y destino en Barcelona. Y, en tanto necesitemos utilizar otros aeropuertos intermedios para viajar al resto del globo, seamos sabios para comprender que lo que nos interesa es que las rutas con origen y destino en Barcelona utilicen aeropuertos *concentradores* cuyo idioma sea conocido por nuestro usuario medio, y con los que podamos llegar más fácilmente a acuerdos de reciprocidad en la negociación con las compañías aéreas.

Evitemos comenzar la casa por el tejado. Sólo produciría nuevas frustraciones, que contribuirían a agravar más nuestro ya de por sí irritado estado de ánimo.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

La política española ha iniciado un trayecto enormemente desconcertante y de consecuencias imprevisibles. Después de años de contención y disimulo, ha aparecido un nacionalismo español descomplejado y dispuesto a reivindicarse en lo más añejo y rancio de sus sentimientos y discursos, sin temor a las consecuencias que esa reivindicación pueda generar en la siempre difícil arquitectura del Estado de las autonomías. Ciertamente es la derecha más conservadora la que se ha levantado esgrimiendo el orgullo patrio. Y lo ha hecho con éxito, para qué nos vamos a engañar. Poco importa la guerra de cifras. Pero nadie se debería llevar a engaño pensando que eso son cosas de la derecha. Lamentablemente hay indicios más que suficientes para pensar que, en el estadio en el cual la política española se encuentra en estos últimos años, una parte de la izquierda ha sucumbido también a esos cantos de sirena nacionalistas, aunque eso sí, con una estética mucho más contenida. Entre los nacionalistas españoles de izquierda los himnos, las banderas y las proclamas públicamente agitadas incomodan. Pero tampoco tendríamos que olvidar del todo quiénes y cuándo, por ejemplo, toman la decisión de que en la plaza de Colón ondee una gigantesca enseña, más propia de una apuesta del ministro de Defensa del momento para entrar en el libro Guinness que de un país que requiere inteligencia en la gestión de los símbolos y la explota-

ción de los sentimientos patrios.

Hay que destacar que ese *fluir* generoso del sentimiento nacionalista español emerge como continuación de una apuesta política mayoritaria desde Cataluña que buscaba consolidar unas bases jurídicas y políticas sólidas desde las cuales superar los tradicionales desencajes que han protagonizado y determinado las relaciones Cataluña-España. Sólo hay que hacer una incursión en la hemeroteca para recuperar mensajes permanentes de destacados políticos catalanes, empezando por el *president* Maragall, donde se insistía en que lo que se perseguía con el nuevo Estatuto era adecuar el marco del autogobierno a las nuevas necesidades casi tres décadas después de su puesta en marcha; tejer unas nuevas complicidades que permitirían que la cuestión del autogobierno no apareciera en la agenda política catalana y española en, como mínimo, toda una nueva generación, y superar también la retórica nacionalista catalana que, según Maragall, impedía avances en otros ámbitos sumamente importantes. La realidad, sin embargo, siempre se impone al discurso voluntarista de lo que debería ser. Y no hay muchas dudas de que la realidad política española —y, lo que es más preocupante, tam-

bién la social— ha dado pruebas evidentes no sólo de no estar por la labor de aquello que desde Cataluña se proponía, sino además, de considerarlo una ofensa.

A ojos de muchos españoles Cataluña ha ofendido al resto de España con su propuesta estatutaria.

La España ofendida ha matado al patriotismo constitucional que muchos decían defender

No sólo con la que el Parlamento catalán aprobó en primera instancia el 30 de septiembre, sino también con la que finalmente aprobaron las Cortes Españolas y el pueblo catalán refrendó en las urnas. Nos podríamos preguntar si ese sentimiento de ofensa se debe al contenido de la propuesta estatutaria o al simple hecho de que desde Cataluña se replantea la posibilidad de reformar el Estatuto, es decir, a la osadía de impulsar unilateralmente la redefinición del marco del autogobierno. Mucho me temo que se trata de esto último. Tal y como se han desarrollado las cosas,

quién sabe si la ofensa hubiese existido de igual manera aunque el texto enviado por el Parlamento catalán para su aprobación última en el Parlamento español hubiese sido una traducción al catalán de la Constitución de Cádiz de 1812. Lo que está en cuestión desde el primer día no es si Cataluña es o no una nación, sino si el Parlamento catalán debía impulsar un nuevo Estatuto e, indirectamente, si el Parlamento catalán tenía legitimidad a ojos de muchos españoles para hacerlo. Retomemos de nuevo la hemeroteca para recordar cómo las primeras críticas en esa cuestión eran sobre la *inoportuna*, y decían también *innecesaria*, reforma estatutaria. La ofensa para muchos españoles es previa a conocer el contenido y reside en la osadía de aplicar lo que el propio ordenamiento constitucional prevé si esa aplicación no ha nacido con el beneplácito de determinados sectores políticos, sociales y mediáticos españoles.

Es evidente que podemos analizar la situación creada a partir de los errores de percepción de la clase política catalana, de analistas y de otros sectores afines. Pero sería sugerente, aunque sólo fuera una vez en la historia de nuestro país, que no nos mirásemos tan acompleja-

damente a nosotros mismos, sino que tuviésemos la osadía de comprender y analizar lo que ocurre en España sin sentimiento de culpa sobre cómo hemos procedido o dejado de proceder. Ha habido una propuesta inicial del Parlamento catalán; ha habido un pacto con el Gobierno español; ha habido los informes de constitucionalidad preceptivos; ha habido negociación y aprobación parlamentaria, y finalmente el texto ha sido refrendado en las urnas. Con todos los altibajos que uno quiera —ya hemos hablado de ellos con generosidad en otros momentos— el proceso estatutario ha sido culminado procedimental y jurídicamente de manera impecable. ¿Sigue siendo esto un motivo de ofensa para muchos españoles? La respuesta es sí y la afirmación que se deriva de la respuesta es que España tiene un problema. Si la mayoría actual no sabe articular un discurso que construya la España plural y sólo se atreve a defender ante el Tribunal Constitucional el Estatuto catalán buscando una sentencia interpretativa diluyendo el pacto estatutario y dejando el Estatuto a los vaivenes de la situación política española, el problema de España se agranda. La España ofendida ha matado al patriotismo constitucional que muchos decían defender. Quizá muchos de los que hablaron de él no habían leído, ni tan siquiera oído hablar, de Habermas. Cosas que ocurren.

Jordi Sánchez es politólogo.